

# Avanzar en los cambios imposterergables

Los primeros años del siglo XXI vienen alentando la esperanza de cambios importantes. No sólo en el país sino en varios del continente latinoamericano, más allá de un contexto internacional donde la hegemonía militar de los EE.UU. y las corporaciones económicas mundiales acentúan la distancia entre los países ricos y los pobres. La reciente reelección de Bush en Estados Unidos expresa la consolidación de la política imperial, con grave amenaza para la seguridad, la economía y la estabilidad política de nuestros países.

Como contracara de esa globalización hegemónica por el neoliberalismo, se fortalece el proceso de integración regional, como forma de protección y autonomía de nuestros países. El triunfo del Frente Amplio en Uruguay es un nuevo e importante eslabón. Algunos piensan que con Tabaré Vázquez en la presidencia de Uruguay se le ha asestado un duro golpe a la instalación del ALCA, que en varios aspectos del libre comercio debía entrar en vigencia a partir del 2005. Y se puede potenciar el Mercosur como camino hacia una integración política de Latinoamérica. Fue el largo camino del Mercado Común Europeo que terminó en la Unión Europea. También a nivel internacional tanto las sociedades como los estados de los países pobres buscan articularse en instancias supranacionales, para formar redes que apunten desde espacios de debate e intercambio a buscar respuestas a los propios problemas. El Foro Social Mundial, algunas propuestas de reestructuración de las Naciones Unidas y otras iniciativas tanto comerciales como culturales señalan ese rumbo.

El movimiento social que se expresa a nivel internacional es el que también vive la sociedad civil hacia el interior de cada país. La hegemonía del neoliberalismo, con el abandono del estado dejando las mayorías libradas a su propia suerte, generó como efecto de sobrevivencia el surgimiento de las organizaciones sociales que en la resistencia y la lucha han adquirido experiencia no sólo de articulación sino también de gestión; y un modo de relacionarse con el estado, que se va modificando a medida que se profundizan los procesos democráticos. Es lo que se está viviendo en Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador y ahora en Uruguay. En algunos lugares con un largo proceso de consolidación, en otros ape-

nas reiniciando caminos luego de experiencias frustradas, como en nuestro país.

No es menor la importancia que tiene la disputa del estado en estos procesos. Porque así como su apoderamiento por parte del neoliberalismo posibilitó la imposición de una cultura que vació las propias alforjas, la recuperación de espacios institucionales por parte del movimiento popular permite avanzar más rápido en la disputa por los beneficios económicos o los valores culturales. Este es un debate y un aprendizaje que las organizaciones populares deben profundizar, para despejar los prejuicios acumulados en los años de apogeo neoliberal.

El involucramiento del conjunto social es fundamental para cimentar los cambios en una dirección favorable a la profundización de la democracia. En este sentido todavía es insuficiente el esfuerzo volcado en la construcción política. Sin dejar de valorar los intentos de reagrupamiento es necesario potenciar articulaciones más amplias y masivas sobre las coincidencias en aspectos fundamentales. Esto es lo que sucede en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otros lugares del país, sin que tenga una extensión nacional. Porque hay que decir también que en gran parte de las provincias con menor desarrollo económico-social la realidad política está atada a la tradicional estructura bipartidista, con fuerte arraigo de la metodología clientelista.

Nada nace de la nada. Una nueva construcción política se asienta en las mejores experiencias de cada grupo. Lo que ha dado en llamarse la "transversalidad" ha sido un punto de partida para la confluencia de expresiones políticas afines. Pero la lentitud para una conformación mayor y la existencia del poderoso aparato del justicialismo en la provincia de Buenos Aires tironean al presidente Kirchner. Los sectores hegemónicos del partido justicialista, expresados por Duhalde y los caciques neoliberales de las provincias, sin compartir las orientaciones políticas del presidente, no quieren desaprovechar el alto nivel de consenso que éste tiene en la población y pretenden capturarlo poniéndolo al frente del partido para mantener su posición. Kirchner por su parte no ha logrado construir una fuerza propia y espera que las expresiones transversales logren una articulación de lo social con lo político con alcance nacional.

Mientras tanto navega en esta realidad y las elecciones de diputados del año que viene dirán hasta donde se avanzó en una nueva construcción. Nadie cree que esto sea de la noche a la mañana. Deberá aprenderse de la experiencia del Frente Amplio en Uruguay que rompió el bipartidismo y llegó a la presidencia del país luego de treinta años de sucesivas derrotas y experiencias parciales de gestión en los municipios y en las legislaturas. Por cierto que la realidad política argentina es más compleja que la uruguaya, pero no es un dato menor la existencia de gestiones de gobierno y manejos de porciones importantes del poder institucional, que con buena administración puede contribuir al fortalecimiento organizativo de la sociedad.

La realidad económica al finalizar el año no ha tenido demasiadas variaciones. Ha continuado la tendencia al crecimiento y sigue pendiente la necesidad de una mejor redistribución. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló a fines de octubre: "a pesar de que los números macroeconómicos demuestran un crecimiento, las ventas minoristas se estancaron en octubre producto de la falta de poder adquisitivo del mercado". Aumentar los salarios es una vía para la distribuir la riqueza generada.

El ministro Lavagna anunció un importante crecimiento de la inversión para el 2005, que significará un monto superior al 20% del PBI. Un total de 42 empresas realizarán en los próximos tres años inversiones por 6.111 millones de pesos y generarán 14.000 puestos de trabajo. Otros datos indican un repunte importante de la construcción.

Sin embargo la magnitud de los sectores afectados por las consecuencias de la pobreza requiere de esfuerzos todavía mayores. Un paso positivo en orden a recuperar la cultura del trabajo ha sido el cambio introducido en los planes asistenciales, con mejores mecanismos para garantizar una contraprestación laboral y acentuar la capacitación. Fue un reclamo también de la jerarquía eclesiástica, que se mostró satisfecha con la medida tomada por el área social del gobierno nacional.

La consultora Equis reveló que "poco más de la mitad de los pobres actuales -9,3 millones de personas- pertenecían a familias de clase media, que por las sucesivas crisis fueron cayendo por debajo del nivel de pobreza". No es un dato menor a la hora de plantearse medidas para recuperar el empleo y reactivar el aparato productivo.

Según estadísticas que comparan el empleo con igual mes del año anterior, el empleo formal creció en un promedio de 1,5% en las principales ciudades del país, con mejor tendencia en las del interior. El trabajo en negro se encuentra en el 24%, con mayor porcentaje en el campo, donde todavía no han

llegado las inspecciones y controles que viene realizando el Ministerio de Trabajo de la Nación. En lo laboral, la prórroga de la Ley de Emergencia Económica que establece la extensión de la suspensión de los despidos sin causa y la doble indemnización hasta que el índice de desocupación alcance a un dígito (es decir, que sea inferior al 10%) fue una medida que concretó el gobierno pese a la disconformidad de los sectores empresariales.

Son pasos y quedan varios todavía para llegar a un punto del camino en el que puedan verse los signos positivos de la recuperación nacional. Todo lo que falta, que es mucho, no debe impedir ver lo que se tiene, valorando todo en su justa medida.

Porque siguen en disputa dos modelos de país: el neoliberal que se resiste a perder terreno y ha impregnado fuertemente las estructuras del estado, manteniéndose intacto en algunas provincias como Córdoba y otras del interior. Y un modelo más democrático y participativo que recién se insinúa y avanzará también en la medida en que se sigan haciendo esfuerzos por revertir el vaciamiento cultural, restituyendo una conciencia de solidaridad, participación y reconocimiento de los valores propios.

Montados en el clima de inseguridad que promueven, los neoliberales impulsan medidas represivas, pretendiendo acentuar el control social sobre las movilizaciones populares que siguen demandando respuestas a sus necesidades. No es casual, como sucede en Córdoba, que se recurra al asesoramiento de consultoras como el Manhattan Institute, que al decir del sociólogo francés Loic Wacquant, tienen como política la "penalización de la miseria". Es al calor de estos aires represivos que en el país se mantiene aún el procesamiento judicial de unos cuatro mil luchadores populares y permanecen detenidos cuarenta militantes a raíz de su participación en protestas callejeras. Plantearse una política de seguridad también es un debate que debe abordarse, para diferenciarla de la represión al delito que lamentablemente no alcanza a todos por igual. Porque en las cárceles no se ve a los responsables de las evasiones impositivas, de las muertes de niños por desnutrición y otras realidades de impunidad que son el peligroso sustento de los abusos policiales que padecen, en las grandes ciudades, principalmente los jóvenes y los pobres.

Desde un modelo democrático y participativo estas realidades no pueden ser omitidas. Involucrarse en los cambios impostergables que demanda la realidad que sufren amplios sectores de la sociedad es un imperativo que no puede eludirse. No hay excusas para seguir mirando desde el balcón.

Córdoba, noviembre 2004  
Luis Miguel Baronetto